

Universidad, a examen - El País - 16/09/2018

Universidad, a examen

La enseñanza superior no ha alcanzado el nivel de calidad que merece y necesita

La presunta corrupción en la Universidad que pone de manifiesto el caso de los másteres es solo la gota que colma el vaso de una situación desatendida durante décadas: la enseñanza superior no ha alcanzado en su conjunto el nivel de calidad que España merece y necesita. El nepotismo que imperó en la vieja Universidad española ha adoptado formas nuevas a raíz de nuevas reglas, transformándose en un sistema de equilibrios entre figuras o escuelas para seleccionar a los docentes. La calidad y la originalidad de la investigación, por su parte, han sido sustituidas por una comprobación formal y no siempre transparente de los requisitos exigidos para progresar en la carrera académica. El argumento de que no es esta la situación de todos los centros es irrelevante, porque lo que importa a efectos del principio de igualdad de oportunidades, del que la enseñanza es el principal instrumento, es que todas las universidades alcancen un mínimo de calidad y de rigor para seguir expidiendo títulos, exigido entre otras instituciones por sus pares. Lo contrario es tanto como consentir simultáneamente la discriminación y el privilegio: unos jóvenes deben obtener con esfuerzo económico y personal, suyo y de sus familias, lo que a otros sencillamente se les regala, devaluando así los títulos de todos.

Lo increíble es que lo más cerca que han estado los diputados de abordar una materia en la que cualquier sociedad se juega la solidez del vínculo entre ciudadanos y sus posibilidades de progreso, es decir, la educación superior, son las escaramuzas de días pasados, movidas por la estrategia de utilizar el Congreso como

caja de resonancia para crear climas de opinión y no de examinar con rigor un problema crucial.

La dimisión de responsables políticos por haberse beneficiado de un presunto delito de falsedad en documento público, un título universitario en este caso, no debería ser siquiera materia de discusión, y de ahí que proponer medidas de regeneración estrictamente vinculadas a estos hechos, como la supresión de los aforamientos o la publicación obligatoria de los ordenamientos jurídicos carece de instrumentos para prevenirlos y castigarlos. La realidad es la contraria, con el agravante de que orientar la actividad parlamentaria hacia esos remedios de menor cuantía distrae la atención de lo que verdaderamente se ha revelado esta semana: el depósito de confianza que la sociedad española ha hecho en su Universidad consagrando la libertad de cátedra y el principio de autonomía ha sido gravemente dañado.

Los responsables estatales y autonómicos de Educación bajo los que sucedieron los hechos, además de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y el Consejo de Rectores, deben una explicación que solo estaría en condiciones de exigirles un Parlamento comprometido con su función, y no convertido en un mero instrumento de agitación y propaganda.

Alarma en Siria

La provincia siria de Idlib, la última en manos de los rebeldes que luchan contra Bachar el Asad, resume el desastre de un conflicto que se prolonga desde hace siete años y que ha costado la vida a medio millón de personas ante la mirada impotente de Occidente. Si se cumplen las previsiones más funestas, lo peor puede estar por llegar. Un asalto contra esta provincia, del noroeste del país y fronteriza con Turquía, se convertiría en "el mayor desastre humanitario del siglo XXI", según Naciones Unidas.

Ese asalto, para el que el régimen lleva preparándose semanas con la intensificación de los bombardeos, tendría un efecto casi inmediato sobre Europa, ya que provocaría una oleada de refugiados similar a la de 2015. La población civil de Idlib asciende a tres millones de personas, de las que la mitad son desplazados de otras partes de Siria. Cada vez que el régimen conquistaba un nuevo territorio permitía un paso seguro hacia esa zona.

Los perdedores del conflicto sirio, los civiles que tenían un miedo más que justificado a las represalias, están ahora ahí, aterrorizados: saben lo que ha ocurrido en otras ofensivas del régimen—bombardeos indiscriminados, ataques químicos—y son conscientes de lo que puede pasar. Entre ellos, se mezclan unos 30.000 combatientes de diferentes facciones, 15.000 de ellos islamistas radicales próximos a Al Qaeda. Solo los bombardeos de las últimas semanas han provocado 30.000 desplazados. La ONU calcula que un asalto causaría la salida de 800.000 personas hacia Turquía y, luego, Europa.

Lo único que ha podido hacer la UE ante el desastre que se avecina es preparar los campos de refugiados en las islas griegas. Eso también es un resumen de la actitud europea ante el conflicto sirio: ausencia de capacidad diplomática para frenar la matanza y una gestión dividida del flujo de refugiados, que además ha utilizado demagógicamente la ultraderecha para conseguir votos. Mañana se reúnen los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para tratar la ofensiva. Turquía, que ya alberga 3,5 millones de refugiados sirios, cree que puede parar el ataque garantizando que sus tropas desarmarán o matarán a los rebeldes. Aunque Siria y sus aliados rusos lo acepten, solo retrasaría lo inevitable. Tarde o temprano, Damasco intenta hacerse con Idlib con la ayuda de Moscú.

Aunque todavía quedaría fuera del control del régimen un cuarto del territorio sirio, en manos de milicias kurdas apoyadas por EE UU o zonas desérticas que son más bien una especie de tierra de nadie por la que vagan grupúsculos islamistas, la caída de Idlib permitiría a Bachar el Asad proclamar algo parecido a la victoria en la guerra civil que ha arrasado su país. Pero antes, si ningún actor internacional es capaz de hacer nada, el sufrimiento de la población civil será terrible.